

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL A NIVEL INTERNACIONAL (pp. 1-8)

—

JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A NIVELL INTERNACIONAL (pp. 9-15)

ROSA M. FERNÁNDEZ EGEA

Profesora de Derecho Internacional Público / Professora de Dret Internacional Públic

Universidad Autónoma de Madrid

Sumario: 1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos; 2. Sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio

1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Como viene siendo habitual en las crónicas sobre jurisprudencia ambiental a nivel internacional, el foro en el que se han planteado casos con incidencia ambiental es el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)¹. A pesar de constituir una jurisdicción relativa a la salvaguarda de los derechos fundamentales recogidos en la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), es cierto que la salvaguarda del medio ambiente puede encontrarse estrechamente unida al disfrute de algunos derechos fundamentales. Aunque también frecuentemente la protección del medio ambiente puede constituir un límite al disfrute de un derecho fundamental. En los últimos meses hemos encontrado ejemplos de una y otra posibilidad, como veremos a continuación.

En relación con la posibilidad de proteger el medio ambiente al hilo de la salvaguarda del disfrute de un derecho fundamental recogido en la CEDH, esta se ha planteado en casos en los que se alegaba la vulneración del artículo 8 CEDH. En dicho precepto se recoge el respeto a la vida privada y familiar, que el TEDH, en una jurisprudencia ya consolidada, ha interpretado de manera amplia y garantista hasta el punto de aceptar la invocación de este precepto cuando puede constatarse un vínculo directo e inmediato entre la situación de deterioro ambiental y la vida privada o familiar del reclamante².

Así, recientemente el TEDH se ha pronunciado sobre la vulneración del artículo 8 CEDH en supuestos de contaminación atmosférica y acústica derivados de la construcción y el funcionamiento de una fábrica de hormigón (asunto *Apanasewicz* contra Polonia, de 3 de mayo de 2011), de una autopista (asunto *Grimkovskaya* contra Ucrania, de 21 de julio de 2011) o de un matadero (asunto *Orlikowscy* contra Polonia, de 4 de octubre de 2011), todos ellos en fincas adyacentes a las de las viviendas de los reclamantes. En tales casos, los afectados reclamaban que sus respectivos Estados eran responsables por el hecho de permitir el desarrollo de tales actividades en perjuicio de su salud y descanso, que menoscababan su vida privada y familiar.

¹ La jurisprudencia del TEDH puede consultarse en la página web del Tribunal: <http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/>

² A este respecto, véase la crónica de jurisprudencia internacional publicada en el vol. II, núm. 1 (2011).

El TEDH se refirió a su anterior jurisprudencia para afirmar que un caso de contaminación grave bien pudiera suponer una vulneración del artículo 8 CEDH por cuanto supone un impedimento para el normal disfrute del hogar y de la vida familiar y privada. Sin embargo, también hizo hincapié en que dicha contaminación debería superar un nivel mínimo para poder considerarla grave, nivel que se alcanzará dependiendo de la intensidad y duración de la contaminación y de los efectos que tenga sobre la salud de los individuos. Por otro lado, también es necesario ponderar los perjuicios causados con el interés general de la comunidad o los intereses de la parte contraria. Según el Tribunal, el artículo 8 CEDH no se vulnera cuando la contaminación o los perjuicios ambientales o sobre la salud son “razonables”.

De los tres casos mencionados, solo en el asunto *Orlikowscy contra Polonia* el TEDH negó que se hubiera vulnerado el artículo 8 CEDH, ya que las partes no habían aportado las pruebas necesarias para acreditar que habían sido afectadas gravemente por la contaminación del matadero. En el asunto *Grimkovskaya contra Ucrania*, el TEDH afirmó la vulneración del artículo 8 CEDH por superarse los niveles mínimos de ruido y contaminación producidos por el constante tráfico rodado sin que las autoridades competentes hubieran tomado las medidas adecuadas para mitigar tales impactos negativos, pero también porque no se respetaron las obligaciones de acceso a la información y participación ciudadana en la toma de decisiones de la Administración en relación con la construcción de la autopista, en contravención de las obligaciones que recoge la Convención de Aarhus. De esta forma, el Tribunal enfatizó la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre actividades que puedan afectar al medio ambiente, al constituir una salvaguarda procesal para asegurar los derechos protegidos por el artículo 8 CEDH.

En lo que concierne a la protección del medio ambiente como límite del disfrute de derechos recogidos en la CEDH, es frecuente que se plantee con motivo del derecho de propiedad, previsto en el artículo 1 del Protocolo 1 a la CEDH. Así, la protección del medio ambiente puede invocarse para justificar una restricción a un derecho, el de la propiedad, cuyo ejercicio, además de no gozar de una protección absoluta, ha de ponderarse con otros intereses generales.

En la pasada crónica ya comentamos varios asuntos que cuestionaban la actuación de Turquía con respecto a terrenos de titularidad privada que fueron recalificados como terrenos forestales de titularidad pública sin que se procediera a indemnizar a los

anteriores propietarios³. En todos ellos el TEDH afirmó la existencia de una vulneración de los derechos de los reclamantes al producirse una privación de su propiedad que, aun estando motivada por el interés general de proteger la naturaleza y los bosques, no vino acompañada de una indemnización. Se vulneraba así el artículo 1.1 del Protocolo 1 anexo a la CEDH.

En esta ocasión ha sido Grecia la que, durante el período que comprende la presente crónica, se ha visto confrontada en una serie de casos ante el TEDH. Así, en el asunto *Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos Stegaseos Ypallilon Trapezis tis Ellados* contra Grecia, de 3 de mayo de 2011, los terrenos de propiedad de la asociación de empleados del Banco de Grecia habían quedado incluidos en la zona de protección del medio ambiente y del patrimonio cultural de la región de Atenas, impidiendo la construcción en dichos terrenos de apartamentos de vacaciones, para cuyo fin habían sido adquiridos. El asunto *Varvis* contra Grecia de 19 de julio de 2011 se originó con motivo de la salvaguarda del monte Pendeli; el Gobierno griego dictó un decreto que establecía una serie de zonas de protección en las que no se podía construir, entre las que se encontraba la propiedad de los reclamantes. En el asunto *Thanopoulou* contra Grecia, de 12 de julio de 2011, se trataba de un territorio de propiedad de los reclamantes que fue declarado “zona verde” y expropiado, pero sin la consiguiente indemnización.

En todos ellos los reclamantes consideraban que las limitaciones impuestas sobre sus propiedades por motivos ambientales suponían una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la CEDH al menoscabar el uso y disfrute de su propiedad.

El TEDH afirmó que los Estados disponen de un gran margen de apreciación para aplicar las políticas urbanísticas y de protección del medio ambiente que estimen oportunas, y que pueden proceder a limitar la propiedad privada cuando se trata de garantizar un bien general, como es la protección del medio natural. Sin embargo, ello no obsta para que se haya producido una privación de un derecho que debió ser convenientemente indemnizada. Así, en opinión del Tribunal, en tales casos se vulneró el artículo 1.1 del Protocolo 1 anexo a la CEDH por haberse roto el equilibrio necesario entre el interés general y el privado de los reclamantes. No obstante, en el asunto *Thanopoulou* contra Grecia el precepto vulnerado fue el artículo 6.1 CEDH, que

³ Asuntos *Keceli y Baspinar* contra Turquía, de 26 de enero de 2010, y *Bölükbas y otros* contra Turquía, de 9 de febrero de 2010.

establece el derecho a un tribunal independiente e imparcial, por cuanto se dieron ciertas irregularidades con las decisiones judiciales que conocieron del caso en sede nacional.

En definitiva, en dichos casos no se cuestiona la salvaguarda del medio ambiente como objetivo legítimo y válido para limitar el derecho de la propiedad, incluso para privar a una persona de su propiedad. Pero ello no significa que los afectados no cuenten con un justo resarcimiento a tal privación. Ello porque los beneficios para el medio ambiente han de ser proporcionales a los perjuicios causados a los reclamantes.

2. Sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio

Dado el carácter transversal de la protección del medio ambiente, no es poco frecuente que se resuelvan disputas en ámbitos materiales distintos del ambiental, pero con claras incidencias en este último. En el apartado anterior hemos comprobado que así sucede cuando se trata de la salvaguarda de los derechos humanos, pero también en el marco del sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)⁴.

De hecho, el binomio “comercio-medio ambiente” constituye una relación conflictiva cada vez más habitual, dado que se comienza a imponer el cumplimiento de ciertos estándares ambientales para poder importar o comercializar mercancías en los mercados de algunos Estados. Tales condiciones no siempre tienen un acomodo en las reglas comerciales que prohíben los obstáculos al comercio y el trato discriminatorio de las mercancías.

En el seno de la OMC se han resuelto ya un buen número de controversias comerciales con incidencia ambiental⁵. En el espacio de tiempo cubierto por esta crónica se ha

⁴ Los informes adoptados por el Órgano de Solución de Diferencias pueden consultarse en la página de la OMC: www.wto.org.

⁵ Son famosos los asuntos que enfrentaron a México con los Estados Unidos en relación con el embargo de los contingentes de atún mexicano por no certificar que no habían sido capturados con redes que mataban incidentalmente a los delfines (as. EE. UU.-Restricciones a la importación de atún de 1991 y 1994). También las restricciones a la comercialización de gasolina que no cumplía un determinado estándar de limpieza para preservar el aire puro (EE. UU.-Pautas para la gasolina reformulada y convencional de 1996); las prohibiciones a la importación de camarones en los Estados Unidos de aquellos países que no certificaran que habían sido capturados sin poner en peligro la vida de las tortugas marinas (EE. UU.-Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón de 1998), o los embargos comerciales de la UE a la carne vacuna hormonada (CE-Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos de 1998), al amianto (CE-Medidas que afectan al amianto y los productos que contienen amianto de 2000) o a los organismos genéticamente manipulados procedentes de los Estados Unidos, entre otros países (CE-Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de

pronunciado el grupo especial en el asunto Estados Unidos-Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos del atún⁶. Dicha disputa se originó al adoptar los Estados Unidos ciertas medidas que prohibían la comercialización del atún y productos del atún procedentes de México con la etiqueta “dolphin-safe”. En opinión de México, la medida estadounidense era discriminatoria e innecesaria puesto que el atún mexicano se ajustaba a los métodos establecidos por la Comisión Interamericana del Atún Tropical. De esta manera se vulneraban los artículos I y III del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (más conocido por sus siglas en inglés, GATT), así como una serie de preceptos del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC).

El 15 de septiembre de 2011 el panel emitió su informe, en el que consideró la vulneración de las reglas comerciales contenidas en los artículos 2.1, 2.2 y 2.4 del Acuerdo OTC, tras afirmar que la regulación estadounidense podía considerarse como un “reglamento técnico” en el sentido de dicho Acuerdo. En primer lugar, el panel determinó que la medida estadounidense no confería un trato menos favorable al atún y los productos del atún procedentes de México, por lo que no se vulneraba el artículo 2.1 OTC. Tampoco consideró que se vulneraba la regla contenida en el artículo 2.4 OTC, que requiere que las restricciones al comercio se basen en los estándares internacionales existentes, pues dichos estándares no eran apropiados para cumplir el objetivo ambiental que los Estados Unidos pretendían alcanzar con su medida. Tales objetivos consistían en proteger a los consumidores que confían en que comprando productos “dolphin-safe” no se han causado efectos perjudiciales sobre tales animales, y en contribuir a la protección de los delfines al desincentivar la captura del atún por métodos que tengan impactos negativos sobre los primeros.

Estas decisiones ponen de manifiesto dos ideas muy importantes que suponen un avance en relación con la jurisprudencia anterior en asuntos parecidos. En primer lugar, tratar dos productos de forma diferente por sus distintos impactos sobre el medio ambiente no supone una discriminación prohibida por las reglas comerciales, sino que es una política legítima. En segundo lugar, se afirma que son los Estados los que han de establecer qué

productos biotecnológicos de 2006). Un estudio pormenorizado de todas estas diferencias se encuentra en Rosa M. Fernández Egea, *Comercio de mercancías y protección del medio ambiente en la OMC*, Marcial Pons, 2008.

⁶ Más información sobre esta diferencia, así como el informe del panel, en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds381_s.htm.

mínimos ambientales desean garantizar sin que se encuentren obligados a bajar el nivel de protección por el hecho de que existan normas internacionales que así lo contemplen.

Sin embargo, el panel sí consideró que la medida estadounidense era contraria al artículo 2.2 OTC, que exige que no se introduzcan obstáculos innecesarios al comercio. Ello porque, en opinión del panel y siguiendo las alegaciones de México, las medidas estadounidenses son más restrictivas de lo necesario para alcanzar el objetivo de protección ambiental deseado, ya que las medidas de etiquetado solo cumplen parcialmente la finalidad de proteger a los delfines y porque existen medidas alternativas menos restrictivas que garantizarían el mismo nivel de protección que las medidas de etiquetado. La medida alternativa propuesta por México consistía en utilizar la etiqueta “dolphin-safe” certificada por el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD), que establece un sistema de control y verificación negociado multilateralmente.

En cuanto a las posibles vulneraciones del GATT, el panel se abstuvo de pronunciarse por motivos de economía procesal, toda vez que ya se había declarado la vulneración del artículo 2.2 OTC.

Por otro lado, aún están pendientes otras diferencias con incidencias ambientales. Dos de ellas se han originado tras la adopción del Reglamento (CE) N° 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de las CE, de 16 de septiembre de 2009, sobre el comercio de productos derivados de la foca, que prohíbe la importación de productos derivados de focas que hayan sido capturadas mediante prácticas crueles e inhumanas. Canadá y Noruega han interpuesto sendas reclamaciones ante el Órgano de Solución de Diferencias al considerar que con estas medidas la Unión Europea vulnera sus compromisos en virtud del GATT, el Acuerdo OTC y el Acuerdo sobre Agricultura (Comunidades Europeas-Medidas que prohíben la importación y comercialización de productos derivados de las focas)⁷. De esta forma, solicitaron el establecimiento de un grupo especial o panel que examine la compatibilidad de dicha normativa con las reglas comerciales de la OMC⁸.

⁷ Información sobre estas diferencias puede encontrarse en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds400_s.htm (reclamación de Canadá) y http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds401_s.htm (reclamación de Noruega).

⁸ El 21 de marzo de 2011 se estableció un panel con motivo de la reclamación de Canadá y el 21 de abril de 2011, con motivo de la reclamación de Noruega. No obstante, el Órgano de Solución de Diferencias ha determinado que sea el mismo panel el que examine la cuestión.

Por otra parte, hay que referirse a la que ha enfrentado a Ucrania con Moldavia por la imposición de unas cargas pecuniarias sobre los productos importados por motivos ambientales (Moldavia-Medidas que afectan a la importación y la venta en el mercado interior de productos-carga ambiental)⁹. En concreto, la aplicación de tales cargas se produce respecto de los bienes cuyo uso tenga efectos contaminantes o de aquellas mercancías que se comercializan en envases de plástico o Tetra Pak, lo que da lugar a un incremento considerable del precio final del producto. Según Ucrania, se trata de medidas discriminatorias puesto que solo los productos importados han de soportar esas cargas, a diferencia de los productos nacionales similares, lo que contraviene el artículo III del GATT. Todavía no contamos con un pronunciamiento del grupo especial al respecto.

⁹ Véase información sobre el caso en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds421_s.htm.

Sumari: 1. Tribunal Europeu de Drets Humans. 2. Sistema de solució de diferències de l'Organització Mundial del Comerç.

1. Tribunal Europeu de Drets Humans

Com és habitual en les cròniques sobre jurisprudència ambiental en l'àmbit internacional, el fòrum on s'han plantejat casos amb incidència ambiental és el del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)¹. A pesar de constituir una d'una jurisdicció relativa a la salvaguarda dels drets fonamentals recollits en la Convenció Europea de Drets Humans (CEDH), és cert que la salvaguarda del medi ambient pot trobar-se estretament unida al gaudi d'alguns drets fonamentals. Encara que també sovint la protecció del medi ambient pot constituir un límit al gaudi d'un dret fonamental. En els últims mesos trobem exemples d'una possibilitat i de l'altra, com veurem a continuació.

En relació amb la possibilitat de protegir el medi ambient al fil de la salvaguarda del gaudi d'un dret fonamental recollit en la CEDH, aquesta s'ha plantejat en casos en què s'al·legava la vulneració de l'article 8 CEDH. En aquest precepte es recull el respecte a la vida privada i familiar, que el TEDH en una jurisprudència consolidada ha interpretat de manera àmplia i garantista fins al punt d'acceptar la invocació d'aquest precepte quan pot constatar-se un vincle directe i immediat entre la situació de deteriorament ambiental i la vida privada o familiar de la part reclamant².

Així, recentment el TEDH s'ha pronunciat sobre la vulneració de l'article 8 CEDH en supòsits de contaminació atmosfèrica i acústica derivades de la construcció i del funcionament d'una fàbrica de formigó (assumpte *Apanasewicz c. Polònia*, de 3 de maig de 2011), d'una autopista (assumpte *Grimkovskaya c. Ucraïna*, de 21 de juliol de 2011) o d'un escorxador (assumpte *Orlikowscy c. Polònia* de 4 d'octubre de 2011), totes en finques adjacents a les dels habitatges de les parts reclamants. En aquests casos, les parts afectades reclamaven que els seus respectius estats n'eren responsables pel fet de permetre aquestes activitats en perjudici de la seva salut i el seu descans, ja que els afectava la vida privada i familiar.

El TEDH es va referir a la jurisprudència anterior per afirmar que un cas de

¹ Podeu consultar la jurisprudència del TEDH al web del Tribunal: <http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+datava's/>.

² Pel que fa a això, vegeu la crònica de jurisprudència internacional publicada en el vol. II, n.1 (2011).

contaminació greu bé podia suposar la vulneració de l'article 8 CEDH, ja que és un impediment per al gaudi normal de la llar i de la vida familiar i privada. No obstant això, també va insistir que aquesta contaminació hauria de superar el nivell mínim per poder considerar-la greu, nivell al qual s'arribarà depenent de la intensitat i duració de la contaminació i dels efectes que tingui sobre la salut dels individus. D'altra banda, també cal ponderar els perjudicis causats amb l'interès general de la comunitat o els interessos de la part contrària. Segons el Tribunal, l'article 8 CEDH no es vulnera si la contaminació o els perjudicis ambientals o sobre la salut són "raonables".

Dels tres casos esmentats, només en l'assumpte *Orlikowscy c. Polònia*, el TEDH va negar que s'hagués vulnerat l'article 8 CEDH, ja que les parts no havien aportat les proves necessàries per acreditar que havien estat afectades greument per la contaminació de l'escorxador. En l'assumpte *Grimkovkaya c. Ucraïna*, el TEDH va afirmar la vulneració de l'article 8 CEDH per haver superat els nivells mínims de soroll i contaminació produïts pel constant trànsit rodat sense que les autoritats competents prenguessin les mesures adequades per mitigar aquests impactes negatius, però també perquè no es van respectar les obligacions d'accés a la informació i participació ciutadana en la presa de decisions de l'Administració en relació amb la construcció de l'autopista, en contravenció de les obligacions que recull la Convenció d'Aarhus. D'aquesta manera, el Tribunal va emfatitzar la importància de la participació ciutadana en la presa de decisions sobre activitats que poden afectar el medi ambient, ja que constitueixen la salvaguarda processal per assegurar els drets protegits per l'article 8 CEDH.

Pel que fa a la protecció del medi ambient com a límit del gaudi de drets recollits en la CEDH, és freqüent que es plantegi amb motiu del dret de propietat, previst en l'article 1 del Protocol 1 a la CEDH. Així, la protecció del medi ambient pot invocar-se per justificar la restricció a un dret, el de la propietat, que a més de no gaudir de protecció absoluta, el seu exercici ha de ponderar-se amb altres interessos generals.

En la crònica anterior vam comentar uns quants assumptes que qüestionaven l'actuació de Turquia respecte als terrenys de titularitat privada que van ser requalificats com a terrenys forestals de titularitat pública, sense que s'indemnitzés els anteriors propietaris³, En tots aquests assumptes, el TEDH va afirmar que s'havien vulnerat els

³ Assumptes *Keceli i Baspinar c. Turquia* de 26 de gener de 2010 i *Bölükbas i altres c. Turquia* de 9 de febrer de 2010.

drets de les parts reclamants, ja que hi va haver la privació de la seva propietat que, fins i tot estant motivada per l'interès general de protegir la naturalesa i els boscos, no ha estat acompanyada per cap indemnització. Es vulnerava, així, l'article 1.1 del Protocol núm. 1 annex a la CEDH.

En aquesta ocasió ha estat Grècia la que, durant el període que comprèn la present crònica, s'ha vist confrontada en una sèrie de casos davant del TEDH. Així, en l'assumpte *Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos Stegaseos Ypallilon Trapezis Tis Ellados c. Grècia*, de 3 de maig de 2011, els terrenys de propietat de l'associació d'empleats del Banc de Grècia s'havien inclòs en la zona de protecció del medi ambient i del patrimoni cultural de la regió d'Atenes, amb la qual cosa s'impedia que s'hi construïssin apartaments de vacances, motiu pel qual s'havien adquirit. L'assumpte *Varvis c. Grècia*, de 19 de juliol de 2011 es va originar amb motiu de salvaguardar la muntanya Pendeli. El Govern grec va dictar un decret en què establia una sèrie de zones de protecció on no es podia construir, entre les quals es trobava la propietat de les parts reclamants. En l'assumpte *Thanopoulou c. Grècia*, de 12 de juliol de 2011, es tractava d'un territori de propietat de les parts reclamants que va ser declarat com a "zona verda" i expropiat, però sense la conseqüent indemnització.

En tots, les parts reclamants consideraven que les limitacions imposades sobre les seves propietats per motius ambientals suposaven la vulneració dels drets fonamentals recollits en la CEDH, ja que menyscabaven l'ús i el gaudi de la seva propietat.

El TEDH va afirmar que els estats tenen un gran marge d'apreciació per aplicar les polítiques urbanístiques i de protecció del medi ambient que estimen oportunes i pot procedir-se a limitar la propietat privada si es tracta de garantir un bé general, com és la protecció del medi natural. Tanmateix, això no obsta perquè s'hagi produït la privació d'un dret que va haver de ser convenientment indemnitzada. Així, en opinió del Tribunal, en aquests casos es va vulnerar l'art. 1.1 del Protocol núm. 1 annex a la CEDH per haver-se trencat l'equilibri necessari entre l'interès general i el privat de les parts reclamants. No obstant això, en l'assumpte *Thanopoulou c. Grècia*, el precepte vulnerat va ser l'article 6.1 CEDH, que estableix el dret a un tribunal independent i imparcial, ja que hi va haver certes irregularitats amb les decisions judicials que van conèixer del cas en seu nacional.

En definitiva, en aquests casos no es qüestiona la salvaguarda del medi ambient com a

objectiu legítim i vàlid per limitar el dret de la propietat, fins i tot per privar una persona de la seva propietat. Però això no significa que els afectats no tinguin un rescabament just a aquesta privació. Això perquè, els beneficis per al medi ambient han de ser proporcionals als perjudicis causats a les parts reclamants.

2. Sistema de solució de diferències de l'Organització Mundial del Comerç

Atès el caràcter transversal de la protecció del medi ambient, no és poc freqüent que es resolguin disputes en àmbits materials diferents de l'àmbit ambiental però amb clares incidències en aquest últim. En l'apartat anterior hem comprovat que això passa quan es tracta de salvaguardar drets humans, però també en el marc del sistema de solució de diferències de l'Organització Mundial del Comerç (OMC)⁴.

De fet, el binomi "comerç-medi ambient" constitueix una relació conflictiva cada vegada més habitual, atès que es comença a imposar el compliment de certs estàndards ambientals per poder importar o comercialitzar mercaderies en els mercats d'alguns estats. Aquestes condicions no sempre s'ajusten a les regles comercials que prohibeixen obstacles al comerç i el tracte discriminatori de les mercaderies.

En el si de l'OMC ja s'han resolt un bon nombre de controvèrsies comercials amb incidència ambiental⁵. En l'espai de temps que cobreix aquesta crònica, s'ha pronunciat el grup especial en l'assumpte *Els Estats Units - Mesures relatives a la importació, comercialització i venda de tonyina i productes de la tonyina*⁶. Aquesta disputa es va originar quan els Estats Units va adoptar certes mesures que prohibien la

⁴ Podeu consultar els informes adoptats per l'Òrgan de Solució de Diferències al web de l'OMC: <<http://www.wto.org>>.

⁵ Són famosos els assumptes que van enfrontar Mèxic amb els Estats Units en relació amb l'embarcament dels contingents de tonyina mexicana per no haver certificat que no s'havien capturat amb xarxes que mataren incidentalment els dofins (as. *EUA-Restriccions a la importació de tonyina* de 1991 i 1994). També les restriccions a la comercialització de gasolina que no complia un determinat estàndard de neteja per preservar l'aire pur (*EUA-Pautes per a la gasolina reformulada i convencional* de 1996); les prohibicions a la importació de gambetes als Estats Units dels països que no certifiqessin que havien estat capturades sense posar en perill la vida de les tortugues marines (*EUA-Prohibició de les importacions de determinades gambetes i productes de la gambeta* de 1998), o els embargaments comercials de la UE a la carn vacuna hormonada (*CE-Mesures que afecten la carn i els productes carnis* de 1998), a l'amiant (*CE-Mesures que afecten l'amiant i els productes que conté amiant* de 2000) o els organismes genèticament manipulats procedents dels Estats Units, entre altres països (*CE-Mesures que afecten l'aprovació i comercialització de productes biotecnològics* de 2006). Un estudi detallat de totes aquestes diferències es troba a ROSA M. FERNÁNDEZ EGEA, *Comerç de mercaderies i protecció del medi ambient en l'OMC*, Marcial Pons, 2008.

⁶ Més informació sobre aquesta diferència, així com l'informe del panel, a: <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds381_s.htm>.

comercialització de la tonyina i els productes de la tonyina procedents de Mèxic amb l'etiqueta "*dolphin-safe*". Segons l'opinió de Mèxic, la mesura nord-americana era discriminatòria i innecessària, ja que la tonyina mexicana s'ajustava als mètodes establerts per la Comissió Interamericana de la Tonyina Tropical. D'aquesta manera, es vulneraven els articles I i III de l'Acord general sobre aranzels i comerç (més conegut per les sigles en anglès: GATT), així com una sèrie de preceptes de l'Acord sobre obstacles tècnics al comerç (Acord OTC).

El 15 de setembre de 2011 el panell va emetre'n l'informe, en el qual va considerar que s'havien vulnerat les regles comercials dels articles 2.1, 2.2 i 2.4 de l'Acord OTC, després d'afirmar que la regulació nord-americana podia considerar-se com un "reglament tècnic" en el sentit de l'acord esmentat. En primer lloc, el panel va determinar que la mesura nord-americana no conferia un tracte menys favorable a la tonyina i als productes de la tonyina procedents de Mèxic, per la qual cosa no es vulnerava l'article 2.1 OTC. Tampoc va considerar que es vulnerava la regla de l'article 2.4 OTC, que requereix que les restriccions al comerç es basin en els estàndards internacionals existents, perquè els estàndards esmentats no eren apropiats per complir l'objectiu ambiental que els Estats Units pretenia assolir amb la seva mesura. Aquests objectius consistien a protegir els consumidors que confien que comprant productes "*dolphin-safe*" no s'han causat efectes perjudicials sobre aquests animals i contribuir a la protecció dels dofins ja que desincentiven la captura de la tonyina amb mètodes que tinguin impactes negatius sobre els dofins.

Aquestes decisions posen de manifest dues idees molt importants i que suposen un avenç en relació amb la jurisprudència anterior en assumptes semblants. En primer lloc, tractar dos productes de forma diferent pels diferents impactes sobre el medi ambient no suposa cap discriminació prohibida per les regles comercials, sinó que és una política legítima. En segon lloc, s'afirma que són els estats els que han d'establir quins ambientals mínims volen garantir sense que es trobin obligats a abaixar el nivell de protecció pel fet que hi hagi normes internacionals que ho prevegin així.

No obstant això, el panell sí que va considerar que la mesura nord-americana era contrària a l'article 2.2 OTC, que exigeix que no s'introdueixin obstacles innecessaris al comerç. Això perquè, en opinió del panell, i seguint les al·legacions de Mèxic, les mesures nord-americanes són més restrictives del que cal per assolir l'objectiu de protecció ambiental que es vol, ja que les mesures d'etiquetatge només compleixen

parcialment la finalitat de protegir els dofins i perquè hi ha mesures alternatives menys restrictives que garantirien el mateix nivell de protecció que les mesures d'etiquetatge. La mesura alternativa proposada per Mèxic consistia a utilitzar l'etiqueta “*dolphin-safe*” certificada per l'Acord sobre el Programa Internacional per a la Conservació dels Dofins (APICD), que estableix un sistema de control i verificació negociat multilateralment.

Quant a les possibles vulneracions del GATT, el panell es va abstenir de pronunciar-se per motius d'economia processal, atès que ja s'havia declarat la vulneració de l'article 2.2 OTC.

D'altra banda, encara estan pendents altres diferències amb incidències ambientals. Dues de les quals s'han originat després de l'adopció del Reglament (CE) NÚM. 1007/2009 del Parlament europeu i del Consell de les CE, de 16 de setembre de 2009, sobre el comerç de productes derivats de la foca, que prohibeix la importació de productes derivats de les foques que han estat capturades mitjançant pràctiques cruels i inhumanes. El Canadà i Noruega han interposat sengles reclamacions davant de l'Òrgan de Solució de Diferències, ja que consideraven que amb aquestes mesures la Unió Europea vulnera els seus compromisos en virtut del GATT, l'Acord OTC i l'Acord sobre agricultura (*Comunitats Europees - Mesures que prohibeixen la importació i comercialització de productes derivats de les foques*).⁷ D'aquesta manera, van sol·licitar l'establiment d'un grup especial o panel que examini la compatibilitat d'aquesta normativa amb les regles comercials de l'OMC⁸.

La segona és la que ha enfrontat Ucraïna amb Moldàvia per la imposició de càrregues pecuniàries sobre els productes importats per motius ambientals (*Moldàvia - Mesures que afecten la importació i la venda en el mercat interior de productes-càrrega ambiental*)⁹. En concret, l'aplicació d'aquestes càrregues es produeix respecte dels béns l'ús dels quals tingui efectes contaminants o de les mercaderies que es comercialitzen en envasos de plàstic o “tetra-pack”, i tenen com resultat un increment considerable del preu final del producte. Segons Ucraïna, es tracta de mesures discriminatòries, ja que

⁷ Podeu trobar informació sobre aquestes diferències a: <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds400_s.htm> (reclamació de Canadà) i <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds401_s.htm> (reclamació de Noruega).

⁸ El 21 de març de 2011 es va establir un panel amb motiu de la reclamació del Canadà, i el 21 d'abril de 2011 amb motiu de la reclamació de Noruega. No obstant això, l'Òrgan de Solució de Diferències ha determinat que sigui el mateix panel qui examini la qüestió.

⁹ Vegeu informació sobre el cas a: <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds421_s.htm>.

només els productes importats han de suportar aquestes càrregues a diferència dels productes nacionals semblants, cosa que contravé, d'aquesta manera, l'article III del GATT. Encara no tenim cap pronunciament del grup especial des d'aquest punt de vista.